

EL PACTO SOCIAL

LAS DOS OPCIONES DE LA IZQUIERDA

LAS posiciones de las centrales sindicales, por una parte, y del empresariado español, por otra, no parecen demasiado flexibles en las vísperas de las negociaciones del "pacto social". Hay que creer que son posiciones de principio, enunciadas sobre todo para tranquilizar las propias bases que, en los dos sectores, tienen miedo de concesiones ruinosas. La declaración aparentemente ruda de Marcelino Camacho, el domingo 18, subrayada pero matizada por Ariza y Sartorius, contra un pacto social pero a favor de un pacto político está llena de las aperturas suficientes como para pensar que hay más bases de acuerdo de las que parece. Lo mismo sucede con la mesa redonda de las grandes patronales ("Informaciones", 19 de septiembre), de posiciones maximalistas, incluidos ataques a la oposición. La base para el acuerdo está en que, sin manifestarlo de entrada, cada uno de estos dos grandes grupos que representan la lucha de clases en nuestro país parecen comprender la necesidad de entenderse en los momentos específicos porque atraviesa España, la dependencia mutua y los problemas del otro.

LA insistencia de Comisiones Obreras en el "pacto político", es decir, con la participación de los partidos, la de UGT en que el pacto se reduzca a lo puramente social con libertad para los partidos, obedecen sobre todo a una filosofía de la situación general. El Partido Comunista debe estar satisfecho de la entrada en la sociedad política que le proporcionaron los pactos de la Moncloa, que le sirvieron de multiplicador de su fuerza electoral. Su preocupación en estos nuevos acuerdos es profundizar en lo conseguido: la creación de unos organismos de control permanentes que vigilaran lo acordado en estos pactos, sin dejar al Gobierno el único papel de árbitro, le darían acceso a una forma de gobierno bis; esta era ya la intención del señor Carrillo durante las negociaciones de la Moncloa, de las que pretendió que saliera una especie de institución permanente de vigilancia. No lo consiguió entonces, pero sí consiguió que su partido tuviese una fuerza considerable en el desarrollo de la política española. La idea de que estos nuevos acuerdos no se hagan solamente por un año, sino por tres, indica ya un escaso interés por las elecciones generales

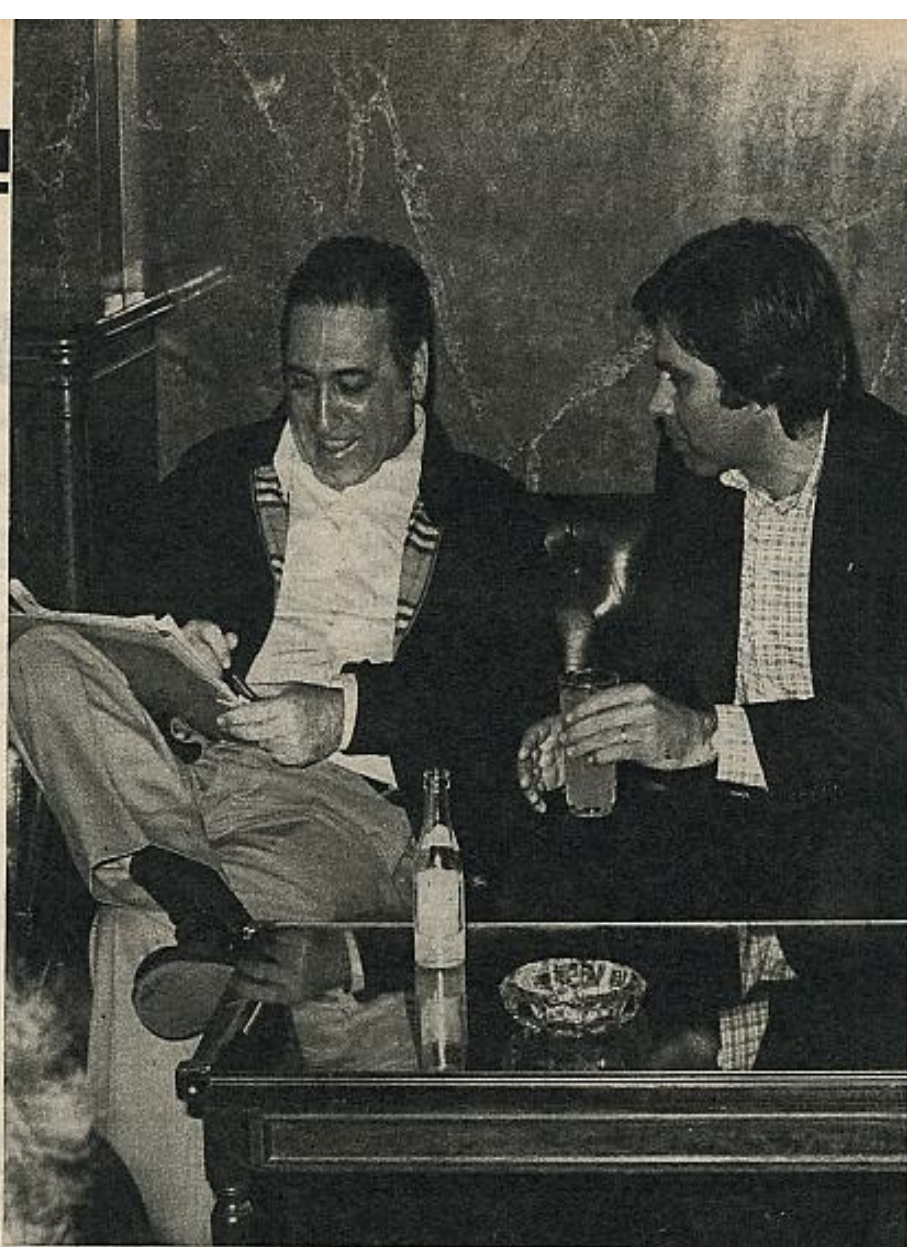
que pudieran celebrarse después de la Constitución: el partido no las promueve, más bien las rechaza. Pero, en todo caso, el acuerdo o pacto socio-político por tres años dejaría su influencia a salvo, cualquiera que fuese el resultado de las elecciones, si se celebrasen. El Partido Comunista sabe que no sólo por su minoría electoral, sino también por la muralla defensiva de Occidente, tan bien representada en el interior de nuestro país, no sólo no va a gobernar por ahora, sino que no va a participar abiertamente en ningún Gobierno que pudiera formarse. Sus condiciones políticas son óptimas en relación con lo posible: le interesa mantenerlas a toda costa, a través del único Gobierno que le parece posible, que no es muy distinto del que tenemos actualmente. Los partidos comunistas del mundo y de la Historia han sabido siempre

actuar políticamente de manera que su fuerza y su capacidad han estado siempre por encima de sus posibilidades objetivas: el señor Carrillo es un maestro en este arte y oficio, y tiene, además de su maestría, la convicción de que esta fórmula es la mejor posible para la defensa de las clases trabajadoras y de la fórmula democrática posible en España.

EL Partido Socialista, en cambio, cree que puede gobernar después de unas elecciones; o que puede ser llamado a una coalición importante o, en el peor de los casos, que puede acrecentar el papel que hasta ahora representa él solo: el de una oposición fuerte, en vísperas de una eventual alternativa que le lleve al Gobierno. No quiere tener las manos políticas atadas por un pacto político que, si llegase



La idea del Partido Comunista de que estos nuevos acuerdos se hagan por tres años indica un escaso interés por las elecciones generales, que pudieran celebrarse después de la Constitución. En la foto: Santiago Carrillo y Marcelino Camacho, de CC. OO.



El Partido Socialista cree que puede gobernar después de unas elecciones; o que puede ser llamado a una coalición importante. Junto a estas líneas: Felipe González, junto al líder ugetista, Nicolás Redondo.

al poder, dificultaría su libertad de gobernar, su capacidad de presentarse como innovador de las estructuras sociales y económicas del país. Considera el pacto social como fruto de la coyuntura, como un mal menor: no le interesa, por lo tanto, que se prolongue en el tiempo. Quiere convertirse en una reserva. Teme que si el pacto político fracasase, se vería envuelto en el fracaso. Ya la experiencia del pacto de la Moncloa ha deteriorado mucho la imagen de sus firmantes. Ya ha producido, en la izquierda, ese "desencanto" que tan útil ha sido, y está siendo, para la derecha no democrática. El crecimiento del paro —que quizá se extienda ya a un 9 o un 10 por ciento de la población activa— y la disminución del poder adquisitivo de los salarios pesan más, en lo político y en lo social, que los posibles incrementos en la balanza de pagos, en la reserva de divisas y en el buen resultado de la fiscalidad, que hasta ahora se está reflejando solamente en forma de carga y no en forma de beneficios colectivos.

COMO para los empresarios lo que cuenta, sobre todo, es que la participación del beneficio de las empresas en el volumen total de la renta genera-

da ha bajado de 412.000 millones a 374.000 millones —según sus cifras— y el crecimiento de quiebras de todas clases y de situaciones de ahogo en empresas grandes y pequeñas, sus peticiones maximalistas van desde el despido libre al bloqueo de salarios; y querrian llegar a una regulación drástica del derecho de huelga y a lo que llaman un regreso al principio de autoridad, que realmente comprende formas de despido —no hay autoridad si no queda el arma última del despido— y de sanción para luchar contra el absentismo y la baja productividad.

EN la cuestión de la productividad hay acuerdo mutuo: España, estadísticamente, es el país con productividad más baja del mundo desarrollado. Culpan los empresarios al obrero: con una seguridad en el empleo —que, recordemos, fue conseguida durante la época de Franco— y, ahora, con la solidaridad de sus compañeros en caso de despido o sanción, el obrero es renuente en su trabajo. Podría tenerse también en cuenta los bajos salarios —en relación a otros países de Europa—, sobre todo en épocas pasadas, que han forzado una reciprocidad psicológica de bajo rendimiento, una desafección al trabajo

realizado y una necesidad de pluriempleo que ha forzado al trabajador a una reserva de energías. Las centrales sindicales, a su vez, culpan de la baja productividad a la organización empresarial: la industrialización de España se ha producido vertiginosamente y no ha permitido la profesionalización del empresario, que en muchos casos es un aficionado, salido de una tradición de empresa familiar y con unos estudios deficientes como consecuencia del caos de la Universidad española; a la comodidad de beneficios grandes con inversiones pequeñas producidos por el proteccionismo de la época franquista, y, por lo tanto, poco preparado para la concurrencia; y a una fascinación por las máquinas contrapesada por un desprecio al trabajo humano con el que ha querido asimilarse el taylorismo de los Estados Unidos, país que le atrae más que cualquiera de los europeos.

A pesar de estos puntos de vista tan disímiles, y de la falta de concreción del Gobierno en una política-marco de carácter económico y social dentro de la que pudieran moverse las distintas opciones, el pacto —político o social, o de las dos cosas— va sin duda a realizarse en los próximos tres o cuatro meses. Una vez más, va a ser movido por el miedo y por el apuro, por la inquietud de todos de producir una auténtica ruptura en la vida nacional, en cierta necesidad de apañarse momentáneamente para salir de una situación dramática para todos. Si la izquierda ve difícil la implantación en el país de una política de carácter socialista entero, la derecha comienza a no creer en una inversión de la democracia que sujetase por la fuerza al mundo del trabajo.

QUEDA una incógnita grave: la repercusión de los resultados en el país. Ni los empresarios pueden seguir arruinándose ni los trabajadores deslizando hacia la miseria y viviendo dentro de unas relaciones laborales que puedan atentar a su dignidad. Si el pacto se hace de espaldas a la realidad del país, o no consigue percutir en ella de una manera positiva —como no repercutió el pacto de la Moncloa, pese a los balances positivos que ahora se le quieran dar— todo va a ser peor aún de lo que es ahora. ■